



Personas defensoras de los derechos humanos

5

Balance de las recomendaciones anteriores

Noruega, Uruguay, Países Bajos, Dinamarca y Australia recomendaron investigar las agresiones contra liderazgos sociales. Sin embargo, estas investigaciones no presentan avances. Desde su creación en el 2016, la Unidad Especial de Investigación (UEI) de la Fiscalía General de la Nación, encargada de dismantelar organizaciones criminales responsables de las agresiones contra personas defensoras, sólo ha conocido 392 casos (126 en el periodo de evaluación), con únicamente el 15 % de condenas (1).

Por su parte, Alemania, Bélgica, Ghana, Costa Rica y Países Bajos, recomendaron reforzar los mecanismos existentes para la protección. Sin embargo, los asesinatos a personas defensoras aumentaron entre el 1 de enero de 2018 al 30 de junio de 2023, reportándose 1.292 casos (2). Esto responde a la falta de priorización de las medidas comunitarias y organizacionales de seguridad en el enfoque de protección, así como la disminución del número de protegidos aprobados por la Unidad Nacional de Protección (3).

Desafíos

La violencia y la falta de garantías para la defensa de los derechos humanos en Colombia continúa. Según el Programa Somos Defensores, entre enero de 2018 a marzo de 2023 (4) hubo 4.685 agresiones contra personas defensoras. Es decir que, cada mes se presentó un promedio de 74,36 afectaciones contra la integridad de quienes defienden la vida.

Ante la grave situación, en septiembre de 2022 el Gobierno nacional anunció un Plan de Emergencia para proteger a personas defensoras, propuesto por las Plataformas de DD.HH y congresistas (5).

A mayo de 2023 existen más de 700 compromisos adquiridos por instituciones y entes territoriales en el marco de los Puestos de Mando Unificados por la Vida (6), los cuales presentan un 27,2 % de cumplimiento, según la Defensoría del Pueblo en su Alerta Temprana 019 del 2023.

Durante el actual Gobierno se han presentado dilaciones para convocar la Mesa Nacional de Garantías (7). Aunque fue uno de los compromisos derivados del Plan de Emergencia, un año después se ha anunciado la instalación de dicho espacio.

Igualmente, no se evidencia aún el fortalecimiento de las capacidades organizativas y comunitarias para garantizar la protección de quienes defienden los DD.HH. Se tiene el desafío de dinamizar, acompañar y dotar de recursos para implementar el Programa Integral de Seguridad y Protección para las comunidades y organizaciones en los territorios, al tenor del Decreto 660 de 2018.

(1) Respuesta a derecho de petición con radicado N°20225760007621 por parte de la Fiscalía General de la Nación.

(2) Las cifras del año 2018 al 2020 se pueden consultar en: https://www.coljuristas.org/centro_de_documentacion/documento.php?id_doc=660. Las cifras del año 2021 se pueden consultar en: https://www.coljuristas.org/sala_de_prensa/articulo.php?id=691. Las cifras del año 2022 se pueden consultar en: https://www.coljuristas.org/sala_de_prensa/articulo.php?id=69. Las cifras al 30 de junio del 2023 se pueden consultar en: https://coljuristas.org/nuestro_quehacer/lideres.php

(3) Alerta Temprana N°019-2023 de la Defensoría del Pueblo.

(4) Se aclara que las estadísticas actualizadas están hasta el mes de marzo de 2023, según boletines trimestrales publicados por Somos Defensores. Acceso al último boletín en: <https://somosdefensores.org/wp-content/uploads/2023/06/Boletin-modelo-2-1-1.pdf>

(5) Según el Programa Somos Defensores preocupa que el Plan "no ha sido suficientemente apropiado por la institucionalidad en su conjunto, que el gran esfuerzo desde el gobierno central se haya concentrado en la instalación de los llamados Puestos de Mando Unificados por la Vida -PMUV-, que constituyen tan solo una de las medidas [y] la falta de una adecuada articulación institucional para su implementación". Programa Somos Defensores. (2023). Interludio. Informe anual 2022. Sistema de Información sobre Agresiones a Defensores de Derechos Humanos -SIADDDH-. p. 119. Ver: https://somosdefensores.org/wp-content/uploads/2023/06/informe-INTERLUDIO-2022_PSD.pdf

(6) Los Puestos de Mando Unificados por la Vida son espacios operativos y transitorios creados en el plan de emergencia para atender casos y definir medidas de seguridad.

(7) La Mesa es un "espacio de alto nivel liderado por el Ministerio del Interior, en el cual voceros de la sociedad civil se reúnen con las cabezas de las instituciones gubernamentales para acordar estrategias, acciones y medidas que contribuyan a solucionar la grave situación nacional sobre las violaciones a los derechos humanos de las personas defensoras". CCJ. (2021). El Proceso Nacional de Garantías para el Ejercicio de la Defensa de los Derechos Humanos en Colombia. p. 11. Ver: <https://viva.org.co/cajavirtual/svc0716/pdfs/CARTILLA%204%202021.pdf>

Las mujeres defensoras en territorios con amplia presencia armada continúan siendo agredidas y el nivel de cumplimiento del Programa Integral de Garantías para Mujeres Líderesas y Defensoras es bajo. Desde su puesta en marcha en 2019 está pendiente la territorialización efectiva y articulada de dicha política. Igualmente, la protección diferencial a personas sexualmente diversas no tiene un plan de acción.

Preocupa la invisibilización que sufren los niños y niñas en el ejercicio de sus derechos como defensores de DD.HH, ya que se exponen a los riesgos propios de su gestión (8). El Estado no posee rutas específicas con enfoques de niñez que brinden garantías a su trabajo como defensores de derechos.

Permanece alto el nivel de impunidad y han sido pocos los logros en el desmantelamiento de grupos armados ilegales responsables, debido al reducido aporte de la UEI para desmantelar a los grupos armados ilegales responsables de crímenes contra personas defensoras.

No se progresa en la identificación de los actores políticos y económicos que se benefician de las agresiones contra las personas defensoras y solo se ha avanzado en un 41% en la identificación de los autores materiales de estos delitos (9).

A pesar de que en este nuevo gobierno la Comisión Nacional de Garantías ha avanzado en la construcción de la Política Pública de desmantelamiento y su Plan de Acción, aún no se han concluido.

En las reuniones de concertación de estos instrumentos se ha evidenciado por parte de la Fiscalía y los organismos de control una postura negacionista de la responsabilidad del Estado en el fortalecimiento y expansión que han tenido los grupos armados causantes de agresiones contra líderes, lideresas, defensores, defensoras y firmantes de paz.

Recomendaciones

1. Investigar de manera integral las agresiones contra personas defensoras que luchan por la garantía de los derechos y lideran causas sociales, incluidos los niños y niñas, con base en estándares internacionales, reconociendo la sistematicidad en los patrones de agresión que posibilite la judicialización de determinadores, el desmantelamiento del complejo criminal incluyendo las redes de financiación ilegal con apariencia de legalidad y los vínculos con agentes del Estado..
2. Garantizar el funcionamiento y la vinculatoriedad de los espacios de interlocución entre entidades estatales y sociedad civil, como la Mesa Nacional de Garantías, la Comisión Intersectorial de Garantías para las Mujeres Líderesas y Defensoras de DD.HH, encargada ésta de orientar la implementación y seguimiento del Programa Integral de Garantías para Mujeres Líderesas y Defensoras de Derechos Humanos (PIGMLD) (10), así como de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad.
3. Formular y materializar una política pública de garantías para la defensa de los DD.HH, que organice los distintos mecanismos y escenarios nacionales y locales, en los cuales confluyen diferentes instituciones para coordinar acciones dirigidas a otorgar seguridad para dicho ejercicio.

(8) Son casos representativos la estigmatización y las amenazas digitales contra la vida y la integridad de Francisco Vera Manzanares, de 11 de años, activista ambiental en 2021, al igual que el asesinato en el 2022 de Breiner David Cucuñame, protector ambiental de 14 años.

(9) Este porcentaje se obtuvo comparando el número de casos asumidos y el porcentaje de condenas dados en el derecho de petición Rad. 20225760007621 respondido por la Fiscalía General de la Nación.

(10) Este programa se sustenta en el Decreto 1314/2016 y la Resolución 0845/2018.